

## ATRAVESAMIENTOS ÉTICO-LEGALES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DEL PSICÓLOGO

### INSERTO EN EL ÁMBITO DE LO FORENSE.

*Urios, Romina.*

rominaurios@yahoo.com.ar

#### Resumen

El año 1994 marca un antes y un después en materia de legislación en nuestro país. La reforma constitucional no sólo trajo modificaciones en cuanto a la actualización de la normativa suprema de nuestra nación, sino que introdujo la perspectiva de derechos, que pasó de ser una cuestión ética a transformarse en ley.

En esta reforma, se introducen en el artículo 75, inciso 22, normativas, declaraciones, convenciones y pactos internacionales de promoción y protección de derechos dándoles jerarquía por sobre las leyes que hasta ese momento se encontraban vigentes.

Esto hace necesario realizar una actualización de las normativas, tanto nacionales como provinciales, para adecuar las leyes al nuevo paradigma, lo que conlleva la derogación de ciertos artículos de leyes y de leyes enteras, por volverse inconstitucionales.

Al presentar las diferentes áreas temáticas y ámbitos de inserción laboral del psicólogo en lo forense, nos encontramos con que las diferentes instituciones y espacios en los que se puede trabajar, están atravesados por normativas específicas que regulan el quehacer de los sujetos implicados por esa normativa.

Para el psicólogo que trabaja en lo forense, resulta fundamental conocer las leyes y poder vislumbrar en su texto, aquellos puntos que resultan centrales a la hora de pensar en las posibles intervenciones.

Es por esto que en este escrito, se tomarán algunos conceptos centrales que atraviesan las leyes que utilizamos en la asignatura—que están de acuerdo con los centros de práctica a los que concurren los estudiantes—, consideramos que es necesario tomar estos conceptos en forma transversal y analizar de qué manera aparecen en cada normativa.

Antes de comenzar con el análisis de cada uno ellos, es menester aclarar, que la perspectiva desde la que serán tratados se enmarca en el paradigma humanista, siendo esta la base esencial desde la cual abordaremos el texto de las leyes.

Todas las normativas que seleccionamos para realizar este trabajo, son posteriores a la reforma constitucional de 1994, en donde, como ya anticipamos, se introdujeron normativas, pactos y convenciones internacionales, entre ellas la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es menester destacar y aclarar que este

escrito se confeccionó teniendo en cuenta el cuerpo de las normas y no lo que efectivamente ocurre en las instituciones, es decir, no se problematizará sobre lo que se cumple o no, sino que intenta ser una herramienta que guíe a los futuros psicólogos en la lectura de las leyes.

Las leyes que tomaremos para el análisis son:

- Ley de ejercicio profesional de la Psicología Nº 10306 y modificatorias (leyes 10372, 10381, 12320). Provincia de Buenos Aires. Sancionada en 1985. Y su Código de ética (cuya redacción se encuentra incluida como una de las funciones del Colegio de Psicólogos en el inciso p) del artículo 15 de esta ley).
- Ley Nacional 26.485. Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Sancionada en Marzo de 2009 y promulgada de Hecho el 1º de Abril de 2009.
- Ley Provincial Nº 14296/11, Ley de Ejecución Penal. Modificada por última vez en agosto de 2011, con motivo de dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Nacional en el fallo Vertbisky, en relación a la adecuación de la norma con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas.
- Ley 13298. Promoción y Protección de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Buenos Aires, modificatorias Ley 13634 y 14537.
- Ley 13634. Fuero de Familia y del Fuero penal del Niño. Promulgada en la Provincia de Buenos Aires en enero de 2007.

Las variables de análisis –conceptos- que analizaremos en cada una de las leyes son:

- la concepción de sujeto de abordaje,
- el tipo de abordaje propuesto (en la mayoría de los casos, la interdisciplina)
- la noción y tipo de asistencia o tratamiento que proponen,
- secreto profesional o resguardo de información,
- Consentimiento informado

Tomaremos como eje de análisis también, las relaciones que se pueden establecer con nuestra Ley de ejercicio profesional y nuestro Código de ética, por ser las normativas que regulan el quehacer profesional del psicólogo. El desafío en ese caso, tendrá que ver con vislumbrar las dificultades que acarrea el entrecruzamiento de las leyes en la intervención del psicólogo en las instituciones que se encuentran en el ámbito de lo forense.

**Palabras clave:** Psicología Forense, Ley, Ética, Rol profesional

## Abstract

1994 made a real difference in the legislation of Argentina. The Constitutional reform brought important changes updating the National Supreme Regulations of our country and introducing the Rights perspective which happened to become a Law. This involved an updating in the national and provincial regulations.

For the psychologist working in forensic psychology, it is essential to know the laws that pass through the professional practice and get the focal points when thinking about a possible psychological intervention.

For the analysis we choose the following laws:

- Psychologist profession law N° 10306.
- National laws N° 26485 and 26657.
- Provincial laws N° 14296/11, 13298 and 13634.

The variables that we choose for the analysis are:

- Subject approach conception.
- Kind of approach proposed.
- The concept and type of counselling or treatment.
- Professional secrecy or personal information safeguarding.
- Informed consent.

Also we take as the core of analysis the possible relationships that may be established between the Psychologist profession law and our professional ethic code, which regulate the work of a psychologist.

**Keywords:** Forensic Psychology, Law , Ethics , Professional Role

## TRABAJO COMPLETO (OPCIONAL)

### Introducción.

El año 1994 marca un antes y un después en materia de legislación en nuestro país. La reforma constitucional no sólo trajo modificaciones en cuanto a la actualización de la normativa suprema de nuestra nación, sino que introdujo la perspectiva de derechos, que pasó de ser una cuestión ética a transformarse en ley.

En esta reforma, se introducen en el artículo 75, inciso 22, normativas, declaraciones, convenciones y pactos internacionales de promoción y protección de derechos, dándoles jerarquía por sobre las leyes.

Así, se hace necesario realizar una actualización de las normativas, tanto nacionales como provinciales, para adecuar las leyes al nuevo paradigma, lo que conlleva la derogación de ciertos artículos de leyes y de leyes enteras, por volverse inconstitucionales.

Al presentar las distintas áreas temáticas y ámbitos de inserción laboral del psicólogo en lo forense, nos encontramos con que las diferentes instituciones y espacios en los que se puede trabajar, están atravesados por normativas específicas que regulan el quehacer de los sujetos implicados por esa normativa.

Para el psicólogo que trabaja en lo forense, resulta fundamental conocer las leyes y poder vislumbrar en su texto, aquellos puntos que resultan centrales a la hora de pensar en las posibles intervenciones.

#### **Leyes que analizaremos en este trabajo.**

- Ley de ejercicio profesional de la Psicología Nº 10306.
- Ley Nacional 26.485. Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
- Ley Provincial Nº 14296/11, Ley de Ejecución Penal.
- Ley 13298. Promoción y Protección de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Buenos Aires.
- Ley 13634. Fuero de Familia y del Fuero penal del Niño.
- Ley 26657. Ley Nacional de Salud Mental.

#### **Definición de sujeto**

Todas las leyes que seleccionamos para realizar este artículo, toman al sujeto objeto de intervención como sujeto de derecho; por lo que siempre tienden a la autonomía y a promover la escucha, el acceso al derecho a la palabra.

Partiremos de tomar en cuenta la definición de sujeto de intervención que encontramos en nuestro Código de ética Profesional, por ser la que debe guiar la práctica del profesional psicólogo. En sus “Consideraciones generales”, el Código de ética define al sujeto de intervención como integral, multideterminado, eminentemente social. Al ser la dimensión social la dominante en la determinación del sujeto, sólo es posible pensar una intervención desde la grupalidad, propiciando el fortalecimiento de los vínculos en lo que Domínguez Lostaló ha denominado “capacitación vincular”, y el abordaje sólo puede ser interdisciplinario, por ser el sujeto integral. La comunidad, el espacio social en donde el sujeto se encuentra inserto y en el cual se ha desarrollado, nos brindarán las claves para su inclusión comunitaria. Toda intervención que se

realice con el sujeto (y no sobre él), debe tender a la autonomía, a que adquiera mayor grado de libertad: una reducción de la vulnerabilidad que permita pasar de la dependencia, a la coestión, para finalizar en la autogestión. Las acciones que nos permitan reducir la vulnerabilidad de las personas con las que trabajemos, nos dará la posibilidad aumentar su autonomía, ya que a menor grado de vulnerabilidad, mayor autonomía del sujeto.

Tomaremos estas coordenadas como brújula orientadora para el análisis de aquellos aspectos que consideramos importante tener en cuenta a la hora de la lectura de las leyes que rigen el ejercicio profesional dentro de instituciones del ámbito forense. Es decir, si bien siempre la ley desde la cual debemos intervenir es la Ley de Ejercicio Profesional, las instituciones en donde nos insertamos laboralmente, tienen sus propias normas, y es allí donde debemos realizar una lectura que nos permita -posicionados desde el paradigma humanista- llevar adelante nuestro trabajo teniendo como centro de nuestra intervención al sujeto.

La Ley 26485, sostiene en su artículo 16º, inciso c), el derecho “a ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente”, y en el inciso d) “a que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte”.

El Manual de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, propone a las unidades penitenciarias como instituciones encargadas de la asistencia y tratamiento de la persona privada de libertad en tanto acciones que “llevan adelante el personal penitenciario con la participación activa de los sujetos procesados y condenados. La asistencia consiste en el acompañamiento-apoyo del sujeto para la satisfacción de sus necesidades y el desarrollo de sus potencialidades (educativas-laborales-creativas)”. Implícita en estos objetivos, se encuentra la concepción de sujeto de derechos, un sujeto activo y la búsqueda de la autonomía.

La ley 13298, postula en sus dos primeros artículos la definición de “niño” y qué características comprenden: se toma al niño como un sujeto pleno de derechos, integral, comprendiendo a todos aquellos sujetos desde la concepción hasta los 18 años de edad.

Esta definición se despliega en el artículo 4º de la ley, en donde se define el concepto de interés superior del niño como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos, a continuación se puntúan lo que se debe tener en cuenta para determinar el interés superior del niño, ítems entre los cuales se encuentra la condición específica de los niños como sujetos de

derecho; y la importancia de tener en cuenta la opinión de los niños de acuerdo a su desarrollo psicofísico.

La Ley 13.634, en su artículo 3º, plantea el derecho del niño a ser oído en cualquiera de las etapas del proceso en el que se encuentre implicado, es decir, aparece la noción de sujeto pleno de derecho.

En el artículo 33º, toma al niño como un sujeto activo, no ya como objeto de derecho.

La Ley 26.657, en su artículo 3º, define el concepto de Salud Mental, y a los sujetos destinatarios de esta normativa, especificando que la ley es para todos los habitantes del territorio nacional, especialmente para aquellos con un padecimiento mental. El cambio de nominación de “enfermedad mental” a “padecimiento mental”, viene a intentar desestigmatizar al sujeto de intervención, dado que un “padecimiento” mental puede atravesarlo cualquier persona en algún momento de su vida. Además, sostiene que se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas, que están multideterminadas, punto de encuentro con la definición que encontráramos en el Código de Ética del Psicólogo.

Promoción y Protección de derechos.

A este respecto, el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, plantea en sus “Consideraciones generales”, que nuestro sujeto de intervención, es un sujeto de derecho.

En la Ley 26.485, presenta en el artículo 2º y 3º los derechos a promover y proteger en relación a las mujeres La Ley Provincial Nº 14.296/11, lo hace en su artículo 9º. Todos esos derechos, dice la ley, tienen como finalidad la revinculación social del sujeto que se encuentra privado de su libertad, pensando en el momento del egreso. La Ley 13.634, explicita en su artículo 36º, los derechos de los que gozará un niño sujeto a proceso penal. Esta ley también estipula los derechos que se les deben respetar a los niños que deben cumplir una medida privativa de libertad. Los encontramos en el artículo 83º. La Ley 26.657, en su capítulo 4º, artículo 7º, presenta todos los derechos que el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental, basados en los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención en Salud Mental.

**Interdisciplina/Interinstitucionalidad**

En la Ley de ejercicio profesional, en su Artículo 3º plantea como una posibilidad el trabajo interdisciplinario, por requerimiento de otras disciplinas, o por propia voluntad.

En la Ley 26.485, en su artículo 7º, inciso c), considera al sujeto integral y la necesidad de un abordaje interdisciplinario. En el artículo 11º, punto 4, aparecen las funciones que debe cumplir el Ministerio de Salud en materia de protección integral de la mujer y prevención de la violencia contra la mujer. También corresponde a la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos “fomentar a las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales” (art. 11, punto 5.2, inciso a).

Con Respecto a la interinstitucionalidad y el trabajo en red, aparece consagrado en el artículo 7º inciso d); también en el artículo 9º, inciso t).

Esta ley plantea, en lo que tiene que ver con las políticas estatales, el fortalecimiento técnico de las jurisdicciones en la interinstitucionalidad y en los servicios que se brindan, en su artículo 10º, punto 2, se postula la necesidad de un abordaje integral.

Aunque no aparece en forma explícita, la Ley de Ejecución Penal, hace referencia al trabajo interdisciplinario en su artículo 28º, donde presenta que la evaluación del equipo de admisión y seguimiento deberá ser integral.

En la Ley 13.298, en el articulado que hace referencia a la creación de los Servicios Locales, se explicita que en los mismos deberá funcionar un equipo interdisciplinario, teniendo que poder garantizarse la atención en sede durante las 24 horas del día.

La Ley 13.634, en su artículo 12º, plantea la creación de un equipo interdisciplinario que asesore al juez de familia y se deja constancia de cómo deberá estar conformado.

La Ley 26.657, en su artículo 5º, introduce la necesidad de un diagnóstico en salud mental de carácter interdisciplinario.

En el artículo 8º, se introduce lo referente a la atención interdisciplinaria. En el artículo 12º, se hace referencia a la prescripción de medicamentos, la necesidad de que la misma esté en relación con el padecimiento del sujeto y que sea revisada en forma periódica. La decisión de prescribir medicamentos, no quede en manos de una sola disciplina, sino que sea producto de una evaluación del sujeto en su integralidad.

El artículo 13º, describe cómo debe estar conformado el equipo interdisciplinario

En el capítulo VII, en el que se hace referencia a las internaciones, en el artículo 16º inciso a), se refiere a la evaluación que se debe realizar para seleccionar la internación como medida terapéutica para un sujeto.

### **Consentimiento informado.**

Nuestro Código de ética, en su artículo 20º, estipula que el psicólogo en su ejercicio profesional debe comunicar al sujeto de intervención todo lo que tiene que ver con su intervención. Y en el Artículo 22º aparece que el sujeto puede denegar el consentimiento, en esto rige el principio de autonomía.

Respecto a lo que tiene que ver con los trabajos de investigación llevados a cabo por el profesional psicólogo y que requiera de la participación de sujetos, el Artículo 37º, sostiene que se deben respetar los derechos de los investigados.

En la ley de ejecución penal, está previsto que, frente a una falta cometida por un sujeto privado de su libertad, antes de aplicar la sanción disciplinaria que corresponda, el mismo debe ser informado del proceso que se llevará a cabo y de las medidas que se pretenden aplicar, para darle posibilidad de descargo, si bien el sujeto puede no consentir en el castigo, debe ser informado. Esto se encuentra normado en el artículo 53º.

La Ley 13.634, plantea en su artículo 36º, en donde quedan expresos los derechos de que goza en niño durante el proceso que se lleva a cabo por una infracción cometida, que uno de sus derechos es el de recibir información sobre el proceso en el que participa.

La Ley 26.657, en su artículo 7º, donde describe todos los derechos que tienen las personas con padecimiento mental, expresa en su inciso j) el consentimiento informado. Esto aparece más explícitamente en el artículo 10º.

En el apartado reservado para el tratamiento de los casos de internación, en el artículo 16º, inciso c), vuelve a remarcar la necesidad de cumplir con el requisito del consentimiento informado.

### **Secreto Profesional / Resguardo de información**

En el artículo 7º de la Ley de Ejercicio Profesional, se postula que “Los profesionales de la Psicología están, sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones vigentes, obligados a guardar secreto profesional.”



Asimismo, en el Artículo 12º del Código de Ética Profesional, se presenta en forma extensa y completa lo que implica el secreto profesional, las causales para el levantamiento del mismo y la instancia de control/consulta en casos dilemáticos.

La ley 26.485, plantea en su artículo 7º inciso f), la necesidad de mantener resguardo de la información. También en el artículo 16º, inciso f), se consagra el derecho “a la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones”.

Con respecto a la denuncia, la ley establece en su artículo 21º, que “se guardará reserva de la identidad de la persona denunciante”.

La Ley 13.634, establece en su artículo 4º el resguardo de información de la causa, garantizando de este modo, la no circulación ni divulgación de información de índole íntima del niño. Asimismo, en el artículo 5º, se hace expresa prohibición de la difusión de la identidad de los niños.

En el artículo 36º, inciso 6, se hace referencia a la importancia de que no queden registros de antecedentes policiales respecto a causas por infracciones cometidas por niños, para el respeto de su dignidad.

En los artículos 53º y 54º, se plantea que no se dará publicidad de las audiencias, permaneciendo con carácter reservado y a las que sólo podrán concurrir aquellas personas que el juez autorice.

La Ley 26.657, plantea en su artículo 7º, inciso i) el resguardo de la información acerca del diagnóstico de las personas atendidas por el equipo interdisciplinario en materia de salud mental.

### **Desinstitucionalización.**

La Ley 26.485 de Protección integral a las mujeres, postula, en su artículo 10, punto 5, la existencia de “centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer” y en su punto 6, frente a situaciones de riesgo para la mujer. La situación de alejamiento del hogar y alojamiento en una institución se da como última medida y por el menor tiempo posible, intentando que los lazos con su comunidad, familia y ámbito laboral no se rompan.

La Ley de ejecución Penal, propone medidas alternativas a la privación de la libertad, y medidas de detención en lugares distintos a la cárcel frente a situaciones particulares. Por ejemplo, el artículo 19º hace referencia a las causales para una detención domiciliaria, pudiendo transitar por este régimen aquellas personas que por su particular situación de salud, la privación de libertad

en el establecimiento carcelario no le permita recuperarse de su dolencia, o quien se encuentre transitando una enfermedad terminal, los discapacitados, personas mayores de 70 años, mujeres embarazadas, madres de niños menores de 5 años.

La ley 13.298 plantea, desde sus primeros articulados, la necesidad de la permanencia de los niños en el ámbito comunitario, de ser posible, en el seno familiar (artículo 3º). La institucionalización queda como medida excepcional, por el menor tiempo posible y solo en casos en que corra riesgo la vida o integridad del niño.

El artículo 33º, explícitamente plantea que “en ningún caso una medida de protección de derechos ha de significar la privación de libertad ambulatoria del niño”.

Cuando se compruebe en forma fehaciente una amenaza a la integridad o vida del niño, se podrá adoptar una medida de abrigo, la misma se encuentra reglada en el artículo 35º bis. Una vez agotada la medida de abrigo, se procederá a dictaminar su adoptabilidad, a los fines de que pueda continuar su desarrollo en el marco de una familia.

El artículo 9º, plantea que los niños no deben ser institucionalizados por causa de carencia de recursos materiales de los padres.

La creación de los Servicios Locales, también van en la dirección de la no institucionalización.

La Ley 13.634 explicita en su artículo 7º, la excepcionalidad de la medida privativa de libertad del niño que ha cometido una infracción, también aparece en los artículos 36º, inciso 4, 46º y 81º.

La Ley 26.657, propone, en su capítulo V, la necesidad de la atención en comunidad para el sostenimiento de los vínculos sociales del sujeto con padecimiento mental (artículo 9º).

También en el artículo 11º, se hace mención a los dispositivos alternativos a la institucionalización. En el capítulo VII (internaciones) hace hincapié en que debe ser una medida excepcional utilizada como recurso terapéutico, aplicada sólo en caso en que se detecte un riesgo cierto e inminente para la persona o para un tercero y que debe durar el menor tiempo posible, una vez restablecido el sujeto de su descompensación, debe continuar con un tratamiento ambulatorio..

Para favorecer la desinstitucionalización y la desestigmatización de las personas con padecimiento mental, la Ley, además de prohibir la creación de nuevos hospitales monovalentes especializados en salud mental (artículo 27), plantea que las internaciones deben realizarse en hospitales generales.

### **Posicionamiento crítico-profesional**

Lo fundamental a la hora del abordaje y la intervención, es el posicionamiento profesional del psicólogo ante la normativa: la aplicación de las leyes sólo debe pensarse en función de nuestro sujeto de intervención y tendiendo a su beneficio. Un posicionamiento a-crítico, sólo conlleva a la burocratización de la práctica y al olvido del sujeto como centro de nuestra intervención.

Como profesionales, debemos ser capaces de tomar las leyes y bajarlas a la realidad con los métodos que consideremos apropiados para esa situación. El hecho de que exista o no un respaldo desde las políticas públicas para las acciones que queremos implementar, no nos deja por fuera de intentarlas; no nos exime de nuestra corresponsabilidad social en no permitir que siga avanzando el proceso de vulnerabilidad psicosocial de los sujetos con los que nos toca trabajar. Si nosotros mismos no somos capaces de posicionarnos desde el paradigma humanista y respetar y trabajar por el cumplimiento de los derechos de los otros –y los propios también-, entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es más que palabra vacía. Debemos ser capaces de encarnar la Declaración y bregar por su efectivo cumplimiento.

#### **Referencias bibliográficas**

Domínguez Lostaló, J.C. (2007) “La doctrina de la protección integral en América Latina”. Bs.As. Koyatún.